

| | |
|---|-------------------|
| San Salvador Atenco : la formación de una identidad de clase en la resistencia | Titulo |
| Ortega Bayona, Berenice - Autor/a; | Autor(es) |
| Buenos Aires | Lugar |
| CLACSO | Editorial/Editor |
| 2005 | Fecha |
| | Colección |
| Organización política; Conflictos sociales; Resistencia; Identidad; Participación ciudadana; México; | Temas |
| Doc. de trabajo / Informes | Tipo de documento |
| "http://biblioteca.clacso.org/clacso/becas/20200129030514/ortega.pdf" | URL |
| Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es | Licencia |

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.org>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.org



SAN SALVADOR ATENCO: LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD DE CLASE EN LA RESISTENCIA*

Berenice Ortega Bayona**

Introducción

El siglo XXI en América Latina despertó entre estallidos políticos y sociales de protesta contra el neoliberalismo. En México, el pequeño municipio de San Salvador Atenco, a sólo 30km de la ciudad de México, fue uno de estos escenarios. En este espacio rural de 35mil habitantes, se organizó una lucha que por nueve meses se opuso a un decreto presidencial mediante el cual se pretendía expropiar más de 5400 hectáreas de tierras comunitarias para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que sustituiría al existente en el oriente del Distrito Federal. En especial, del 11 al 15 de julio del 2002 se vivió un clímax donde se extremó la confrontación entre comunitarios y gobierno mediante la intervención de la policía estatal para frenar los bloqueos y marchas en las vías de acceso a la Ciudad de México. Los machetes de los comuneros de Atenco pararon el tráfico y la construcción del nuevo aeropuerto internacional, negocio multimillonario del gobierno de Vicente Fox, que hubiese favorecido a uno de los grupos de empresarios y políticos más poderosos del país (el grupo Atacomulco). En cuestión de días, el recién iniciado gobierno de Fox se vio forzado a dar marcha atrás y cancelar un proyecto que llevaba años forjándose con el acuerdo de todos menos los campesinos que habitan la zona. Así, como explicaré en este artículo, Atenco se convirtió en una lucha emblemática contra las políticas neoliberales, y su continua presencia como grupo contingente aún después del conflicto aeroportuario, ha representado uno de los principales ejemplos del quiebre de las relaciones político-económicas del pacto social que significó por décadas el Estado posrevolucionario o gestor en México.

A partir de este caso, plantearé cómo las políticas de reestructuración económica neoliberal a partir de la década de los 80's, han conllevado repercusiones paralelas a las económicas al minar las formas de hacer política y negociar demandas y soluciones de los sectores populares, particularmente rurales-campesinos. Para analizar este movimiento social, intento ir más allá de un enfoque coyuntural, o de interpretarlo como

una mera respuesta al contexto neoliberal. Quisiera más bien abordar la construcción de una identidad de clase desde una perspectiva histórico-social como parte de las transformaciones que han sufrido las relaciones político-económicas hegemónicas (de dominación, subordinación y resistencia) dentro del Estado mexicano en las últimas décadas. Para ejemplificar estas transformaciones a través del caso de Atenco, debemos de rastrear su historia específica de organización política construida en la resistencia. Plantearé aquí, las formas de organización políticas y comunitarias que se han ido recuperando y transformando en esta zona; que permitieron la articulación de un movimiento social con los efectos y magnitud que tuvieron para el Estado y el los movimientos sociales en México; y que han sido las bases para construir una identidad de clase, que aún con matices específicos, se puede ubicar como parte de un proceso histórico de luchas sociales frente al capitalismo, ahora encarnado en el neoliberalismo.

Contextualización de la problemática. Las formas de la dominación y resistencia en el campo mexicano bajo el contexto neoliberal. ¿La hegemonía repactada?

La problemática de San Salvador Atenco no se puede comprender sin antes ubicarla como parte de un proceso histórico de enfrentamiento entre la lógica de “Modernización” de las comunidades rurales en México (Bonfil Batalla, 1987), la resistencia a la misma, y el Estado moderno como escenario de esta disputa por las formas, usos y fines de la política en la actualidad.

Los pueblos indígenas latinoamericanos nunca podrían ser iguales a partir de la inserción de nuestros países a la “Modernidad” (Bonfil Batalla, 1987) y la lógica de mercado del capitalismo. Su identificación cultural y social se ha visto necesariamente atravesada por estructuras renovadas de dominación, ligadas al papel económico que juegan dentro de las relaciones de producción capitalistas y a un proyecto colonialista racista de exclusión social (Florescano, 1994). Procesos de homogenización y división que han marcado su desarrollo como actores no sólo económicos o simplemente folclóricos, sino sobre todo, políticos, ya que se han opuesto históricamente a las formas de dominación, obligando al poder a reestructurarse permanentemente para legitimarse ante las demandas y necesidades del poder del otro, el de los subalternos (Gramsci, 2000; Guha, 2002; Scott, 2000).

Los pueblos indígenas y campesinos en México, históricamente han estado al frente de los momentos revolucionarios claves (Womack, 1982; Tutino, 1990; Warman, 1998; Katz, 1990; García de León, 1994); y como explicaremos a lo largo del artículo, las protestas contemporáneas frente al neoliberalismo en todo el país han tenido un componente campesino bastante fuerte. Estos movimientos han puesto en jaque -pero también fortalecido- la hegemonía del Estado mexicano y en consecuencia, el pacto social que se logró sostener durante las primeras décadas después de la Revolución mexicana entre el sector campesino y el partido de Estado, el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Más relevante aún para analizar la protesta en Atenco, resulta la manera en que en las últimas décadas se ha transformado esta relación, perdiendo legitimidad paulatinamente hasta romperse totalmente a partir de los años ochenta; y las formas de dominación que se han revitalizado con la aplicación de políticas neoliberales, así como las formas de resistencia que se han adoptado para enfrentarlas (Roux, 2005).

El pacto social que estableció el gobierno de Lázaro Cárdenas con el movimiento campesino (y otros sectores populares) en los años treinta, mediante la intensificación de la reforma agraria y la integración de las formas de organización sindicales y comunitarias a un proyecto estatal, cimentó una legitimidad estatal posrevolucionaria tan fuerte que con ella se solidificaron y mantuvieron las instituciones políticas del país a través del partido hegemónico (PRI) por más de seis décadas. En perspectiva, es claro que estas instituciones fortalecieron las relaciones y estructuras de dominación (Córdova, 1980), pero gracias al proyecto cardenista, se legitimarían ante los sectores populares; tanto, que hasta la actualidad gran parte de la izquierda y los movimientos populares se siguen alimentando de esta “utopía mexicana” (Gilly, 2001). La fidelidad a la figura de Cárdenas se debe a que detectó en el campesinado un aliado crucial para el sostenimiento del proyecto de nación popular, pero institucional, y que sin su alianza, la estabilidad estatal permanecería tan frágil como durante los veinte años de la Revolución. El campesinado, por su lado, le atribuye a Cárdenas el lugar de respeto que por primera vez tenían en la política nacional; para ellos, estaban defendiendo algo más allá de la figura de Cárdenas: sus tierras, su inclusión en el Estado, los ideales por los que habían peleado en la Revolución. Sin pretender el control del Estado, la Reforma Agraria se impuso como condición del movimiento campesino para legitimar el nuevo orden hegemónico. Esta es una pieza clave para comprender la formación de una memoria política campesina que sigue influyendo en las motivaciones y acciones de los movimientos sociales en México.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a finales de los 80's, diseñó una política de renovación del corporativismo estatal autoritario, bautizado como un nuevo “liberalismo social”, que consistió en políticas sociales, “más pragmáticas que populistas”(Salinas de Gortari, 1990; Villarreal, 1993). A lo que se refería en realidad, es a la reestructuración económica mundial y al viraje ideológico-político reaccionario liberal contra el keynesianismo: el pensamiento neoliberal que se expandía desde Occidente hacia el Sur y que exigía la aplicación de sus medidas de “choque” en México (Anderson, 2000; Saxe-Fernández, 1999). Después de una llegada al poder dudosa y un partido de Estado desprestigiado, había que hallar la manera de legitimar la instauración de estas políticas sin que esto detonara mayores protestas sociales que terminaran por desequilibrar la resquebrajada hegemonía.

El reparto agrario fue por casi seis décadas, la demanda central del movimiento campesino. Sin embargo, a partir de la aplicación de políticas neoliberales y la agudización de la crisis económica, los subsidios al pequeño productor dejaron de fluir y el campesinado se vio obligado, con sus productos y mano de obra, a insertarse y competir con las grandes agroindustrias nacionales y extranjeras dentro del mercado internacional (Rubio, 2004). Con una infraestructura escueta y poco apoyo gubernamental, ha sido casi imposible competir con los altos costos de la producción para la exportación, pero sobre todo, con los precios bajos subsidiados de granos básicos y tradicionalmente mexicanos que ahora deben importarse de otros países como EEUU. La demanda central entonces, ha girado del reparto de tierras a la restitución de apoyos al campo para poder competir internacionalmente sin tener que ofrecer sus productos a

precios insostenibles o vender sus tierras; pero también, a exigir mejores condiciones laborales para los campesinos que ahora se ven forzados a vender su mano de obra en las cosechas de las grandes agroindustrias nacionales y extranjeras (Aragón, 2004). Los ejidatarios y pequeños propietarios de tierra producto de la Revolución, son hoy jornaleros. Se ha dado pues, un viraje en la estructura y sentido del movimiento campesino en México porque se han transformado las estructuras económicas y el rol que juega el campesino dentro de ellas; y este proceso está íntimamente relacionado con el tránsito del Estado posrevolucionario “gestor” al Estado neoliberal.

Las políticas neoliberales no han podido sustituir el “pacto social” posrevolucionario. Tal vez porque nunca fue la intención; el corporativismo neoliberal exigía lealtad política pero ahora, sin ofrecer nada a cambio. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la reforma al artículo 27 constitucional, significó en esencia el fin de la figura ejidal y el reestablecimiento de la propiedad privada y latifundio; y con esto todo un proyecto de reestructuración económica que implicó también el fin del reparto agrario y la intervención del Estado en la planificación económica del sector, para así pasar al impulso de la inversión privada en el campo y el giro hacia la producción para la exportación (González Pacheco, 1992, Prud’homme, 1995; Calva, 1997). El pacto ahora fue con la gran agroindustria, que, de acuerdo con este nuevo modelo económico, sí merece el apoyo gubernamental para enfrentar los “retos” del libre mercado como son el alto costo de la exportación y el cultivo de grandes extensiones de productos de mejor calidad (genéticamente alterados) que puedan competir en el mercado internacional.

Es decir, que las reformas neoliberales más allá de ser simples recetas económicas para enfrentar las crisis del capitalismo, han implicado sobre todo una postura ideológica del papel que debe jugar el Estado y sus pobladores en la economía. En México, esto se concretó en una visión racista y occidental sobre quiénes y cómo deben integrarse al México de la modernidad, ya no posrevolucionario. Los campesinos que no sean lo suficientemente “competitivos”, solo podrán aspirar a migrar o ser botín político de la caridad del Estado. Lo que en antaño fueran derechos conquistados, ahora son políticas públicas para “combatir la pobreza” (línea ideológica que ha continuado en las políticas sociales del PAN también). Sobre todo, el proyecto neoliberal lleva intrínseca una profunda contradicción con la clase campesina: no pueden integrarse al modelo sin perder su identidad. Se deben transformar en jornaleros temporales (poco organizados, sin garantías sindicales ni derechos laborales) o desaparecer. En este sentido, sobre todo en la visión del campesinado, las reformas neoliberales representan un atentado no sólo a una estructura económica, sino también a lo que representaba culturalmente: el respeto a la forma de vida comunitaria, por lo que se había luchado en la Revolución. Este es un tema, que como veremos más adelante, reiterado por los integrantes de la protesta social en Atenco como una de las principales motivaciones de su movilización.

Historia de un conflicto anunciado. “¡Tierra sí! ¡Aviones no!” La resistencia a la construcción del aeropuerto internacional de México, D.F. en San Salvador Atenco.

De Octubre del 2001 a Julio del 2002, el municipio de San Salvador Atenco fue testigo de uno de los conflictos más importantes en el país para el recién llegado gobierno

de Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), autodenominado “del cambio” o de la “transición a la democracia”; siendo el primer partido de oposición, y de derecha, que ocupara la presidencia después de más de 70 años de gobiernos del PRI. Detrás de la decisión de construir el nuevo aeropuerto para la ciudad de México en este municipio, se conjugaron los efectos de políticas neoliberales (proyecto parte del Plan Puebla-Panamá) con intereses político-económicos de grupos caciquiles que ocupan el poder en el estado local. Juntos, representaron para los habitantes de la región un renovado intento de la expropiación de sus tierras y con ello, la amenaza a su forma de vida y todo lo alcanzado a través de años de resistencia y lucha. Sumado a esto, un mal manejo gubernamental de la problemática tradujo al proyecto de la construcción del aeropuerto en una imposición y persecución de los que se oponían, por lo cual se tornó en un conflicto violento que se fue radicalizando.

Trayectoria de lucha en el municipio de San Salvador Atenco

El municipio de San Salvador Atenco está localizado en el Estado de México, en la cuenca del Lago de Texcoco que alguna vez nutrió de agua a todo el valle de México. La región tiene una historia cultural milenaria y a pesar de su colosal vecino, sigue siendo fundamentalmente una zona agrícola; en particular, el municipio de San Salvador Atenco, de 94.67 Km² de extensión y con un poco menos de 35mil habitantes, está integrado casi en su totalidad por tierras ejidales. Ambos rasgos se consideran por los pobladores como logros y conquistas sociales, así como herencia y patrimonio cultural de sus antepasados; se combinan pues, para legitimar la fundamentación de su lucha en dos momentos: primero, porque “somos originarios, y por ende, tenemos derecho a esta tierra”, y segundo, y más relevante, “hemos *trabajado y luchado* por la tierra, por ende tenemos derecho a decidir sobre ella.” Esto ha permitido la preservación de una identidad indígena-campesina, que sin embargo, no ha sido ajena a los cambios políticos, económicos y sociales vividos en el país durante el último siglo; es decir, que la *memoria colectiva de su trabajo y lucha por la tierra*, materializa las razones y motivaciones de su lucha, materializa su identidad colectiva y propicia la organización y lucha política. Abundemos un poco más sobre cómo se fueron traduciendo las necesidades de la comunidad en demandas políticas y formas de organización y de lucha.

La mayoría de los habitantes de Atenco coinciden en que tropas zapatistas pasaron por ahí durante la Revolución Mexicana. Así, saben que los abuelos de muchos de los pobladores de Atenco fueron zapatistas o tuvieron algún contacto con sus filas; y no es difícil rastrear esta trayectoria de lucha heredada en algunos de los habitantes que participaron activamente en las movilizaciones de protesta contra la construcción del aeropuerto. Si bien este factor varía, lo que es un hecho es que todas las tierras ejidales en Atenco adquirieron ese status a partir de la Reforma Agraria que comenzó en 1922. Si quedaba alguna duda acerca de la propiedad de las tierras en Atenco, el reparto agrario legalizó la propiedad colectiva y ejidal en toda la zona; y fueron los abuelos de la actual generación -aunque no todos hayan luchado directamente en la Revolución- los que definitivamente tramitaron la obtención de las tierras y consecuentemente, les heredaron ese derecho a sus hijos. Tal es el caso de David Pájaro, dirigente comunitario y ejidatario: “La propiedad ejidal se ha ido extendiendo con el tiempo... es requisito ser hijo de ejidatario para tramitar la dotación de tierras aún no repartidas.” Los habitantes de Atenco

saben que este “requisito”, es un derecho; derecho ganado a pulso y heredado por los que participaron en todo el proceso revolucionario que condujo a la repartición de tierras. Este ha sido un elemento fundamental en la memoria colectiva de los atenguenses para legitimar la defensa de la tierra hasta la actualidad. Comenta América del Valle, dirigente del movimiento a sus 25 años, de manera enérgica: “Yo les decía a mis compañeros, ¿cómo vas a vender tus tierras? ¿*acaso tú las trabajaste?*, ¿han sido nuestros abuelos y padres los que cultivaron esas tierras, cómo vamos a venderlas así nomás!” Para los atenguenses, queda claro que la tierra representa más que un bien mercantil. Como planteamos al inicio de este artículo, “La tierra es de quien la trabaja”, no es una frase ideada en el vacío. A parte del significado cultural e identitario que tiene la tierra para las comunidades indígenas, en México en muchos casos también ha sido un derecho adquirido históricamente por la experiencia del trabajo y la defensa de la misma.

Las formas de organización política que comparten los atenguenses no sólo tienen raíces campesinas. Los municipios colindantes también han sido sitios de industrialización, donde grandes fábricas de sosa y minas contratan por temporadas a obreros que en otras épocas del año, también son campesinos. Aunque no resulte tan evidente ahora, la mayoría de los habitantes que participaron en las movilizaciones en contra del aeropuerto no sólo fueron obreros, sino que además confluyeron en sus sindicatos durante los años setenta. No se trata de cualquier época, hablamos de una era en la cual el sindicalismo intentaba independizarse del yugo de la CTM y del PRI, y que promovía además un proyecto político muy cercano a los movimientos sociales de izquierda de aquellos tiempos. David Pájaro relata la experiencia de su padre en las fábricas de manera interesante: “Fidel Velásquez *era un español*,... tenían que luchar por sus derechos”, refiriéndose al dirigente obrero “charro” de la época conocido por sus métodos caciquiles y autoritarios. De ese sindicalismo queda muy poco; al igual que de las fábricas circundantes al municipio de Atenco. Tal es el ejemplo de la Fábrica de Sosa de Texcoco, que vivió grandes huelgas y movilizaciones durante los años ochenta y noventa; la última, duró más de 6 años sin cesar y condujo a su eventual cierre en 1999.

Pero las formas de organización y experiencia de lucha retornaron junto con los trabajadores a Atenco. Como comenta don David: “En toda movilización, siempre hay alguien que fue obrero en aquella época. Comparten su experiencia con los demás, ...ya saben cómo actúan el gobierno y los empresarios, y nos aconsejan sobre cómo debemos responder”. Se trata de aprendizajes que obtuvieron en las temporadas en que trabajaron en las fábricas y que además, vivieron al ser parte de las luchas sindicales de aquellos tiempos, los cuales han transmitido en ocasiones de lucha y movilización más actuales. Así, concientemente o no, la experiencia obrera tiene una “irradiación sobre su medio ambiente” (Zavaleta, 1983) Pero, a su vez, estos obreros nunca perdieron su lazo con el campo, regresaban a cosechar cada temporada, y por ende, no se convirtieron en una población que emigrara paulatinamente hacia las grandes urbes. En la conciencia y práctica política de estos atenguenses, se combinaron de esta manera, ambas formas de relacionarse dentro del Estado; es decir, ambas formas de vivir e incidir sobre las relaciones de dominación para formar lo que Zavaleta llama, un “modo de conocimiento” o la experiencia acumulada históricamente en un grupo social determinado; la “experiencia de masa”. (Zavaleta, 1983)

Otro factor que destaca es el de la trayectoria de lucha de los principales líderes del movimiento. “Yo no concibo el movimiento sin el liderazgo de Ignacio del Valle. Él y toda su familia tienen antecedentes de lucha muy antiguos” me afirmó la Profesora Ana María López Rodríguez de la Universidad de Chapingo, quien formó parte del comité universitario que apoyó al movimiento. Tanto Ignacio del Valle como Adán Espinoza Rojas, Jorge Flores Ibarra y David Pájaro, entre otros, llevaban años conformando la protesta social en San Salvador Atenco. Patricia Muñoz Sánchez, profesora de la Universidad de Chapingo, que también formó parte del comité universitario en apoyo al movimiento, rastrea el origen del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, a distintas organizaciones y movilizaciones sociales en Atenco. (Muñoz, s/f) Por ejemplo, desde los años sesentas, se formaron comités de gestión para el agua potable y la perforación de pozos. Como lo confirma don David: “Los ejidatarios simplemente notábamos una necesidad, y nos organizábamos para resolverla. Se supone que el gobierno tendría que apoyarnos para la construcción de pozos, pero era mínimo lo que aportaban, nosotros tuvimos que construir los pozos con material y trabajo propio”. Y es que la dotación inicial de tierras en Atenco que se realizó en 1922, correspondía, en su mayoría, a tierras de mala calidad para la producción agrícola, tierras salinosódicas o de salitre y que continuamente se inundaban. Las tierras muy buenas quedaron en manos de poca gente (autoridades locales). Por más de 80 años se ha trabajado arduamente para combatir la salinidad o proteger a las tierras de la inundación por ser una zona vecina a la ribera del lago de Texcoco. (Ramírez, s/f)

Esto nos trae a un punto bastante interesante, porque nos muestra la manera en que la estructura capitalista ha atravesado la forma de vida comunitaria. Los atenuenses al rechazar la construcción del nuevo aeropuerto, muy a parte de la importancia que tienen los ejidos para su forma de vida, también rechazaron la oferta de venta porque había más en juego. No sólo protegían sus tierras, sino además el *valor del trabajo* que habían invertido en ellas. “¡Cómo nos iban a pagar tan poco! ¿Y todo el trabajo que nos costó instalar los pozos y construir los caminos de acceso a los ejidos? Todo eso sube el valor de nuestros terrenos”, exclama don David al mostrarme los caminos y pozos que a lo largo de los años han construido. Y al referirse al “valor”, no necesariamente implica una mayor cantidad de dinero. El valor de sus tierras también significa la memoria del trabajo que involucró hacerlas cultivables así como la lucha por su defensa. La oferta raquítica gubernamental ofendió “este valor” al no reconocerlo.

De esta manera, a lo largo de los años los habitantes de Atenco, ejidatarios y no ejidatarios, se han organizado para exigir mejores condiciones de vida. Como lo cuenta Jorge Flores Ibarra: “Todavía a mediados de los ochentas, no teníamos pistas pavimentadas en el pueblo, ni siquiera un sistema de drenaje apropiado”. En 1985, surgieron en las inmediaciones de Atenco y Texcoco organizaciones de corte regional como el Comité de Defensa de los Recursos Naturales (CDRN) y el Frente Regional del Valle de Texcoco, que después se convertiría en el Frente Popular del Valle de Texcoco. Asimismo, se formó en Atenco la organización Habitantes Unidos de San Salvador Atenco (HAUSA). Todas estas organizaciones trabajaban en conjunto para gestionar y exigir mejores condiciones de vivienda, protestar por medidas que consideraban injustas

(como el alza de precios e impuestos), y además, para proteger los atentados constantes a la propiedad ejidal. El proyecto de construcción del nuevo aeropuerto no fue el primer intento de expropiar los ejidos de la zona. Desde años anteriores, los atenguenses tuvieron que organizarse varias veces para evitar la invasión o expropiación de sus tierras con el pretexto de la construcción de autopistas que atravesarían la población o de la declaración de “parques o reservas ecológicas”. Con el tiempo, HAUSA derivó en la organización que se denominó Organización Emiliano Zapata que confluyó con habitantes de otras comunidades en el actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. (Muñoz, s/f)

Esta dinámica de autoorganización ha sido la base para las movilizaciones a lo largo de los años; sobre todo, por la conciencia de la misma. La experiencia les ha demostrado que con poco apoyo gubernamental, ellos han sido capaces de alcanzar ciertos objetivos, y esto también lo han defendido en sus protestas. Es decir, que también esta experiencia formó lazos comunitarios y una memoria de lucha y trabajo en un territorio en común. Años de organización y trabajo que también se defendieron en el 2001.

Por otro lado, la cercanía con la Universidad de Chapingo (universidad agraria pública fundada por el proyecto cardenista) fue un factor incidente en la formación política de los habitantes de toda la región. Muchos cuadros políticos de campesinos estudiaron ahí. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de los mismos atenguenses, la Universidad de Chapingo ha servido más como apoyo esporádico que como una influencia política duradera. No obstante, la comunidad universitaria tuvo una participación directa en los acontecimientos de protesta contra la construcción del aeropuerto como foro de información, discusión y mediación.

Otro apoyo importante que tuvieron las movilizaciones del 2001, fue el de los vecinos, no necesariamente ejidatarios, que han migrado en las últimas décadas a la zona y se han asentado de manera irregular en algunos ejidos; y por ende, también se veían afectados por la expropiación de las tierras. Pero más relevante aún, fue el apoyo y “modo de conocimiento”, del que hablé anteriormente, que se fue nutriendo con los distintos movimientos sociales que se solidarizaron a lo largo del conflicto aeroportuario. Como veremos más adelante, la protesta contra la construcción del aeropuerto, los emblemas, formas de lucha y composición del movimiento en Atenco, atrajo una serie de grupos sociales que han marginado sus luchas de las instituciones sindicales y políticas tradicionales. Muchos de ellos, integrados por maestros, universitarios, obreros, pero sobre todo campesinos e indígenas. Muchos de ellos, cercanos al EZLN, por ejemplo. Como lo relata la propia América del Valle: “De ellos aprendimos que toda lucha campesina es lucha zapatista, que es lucha por la tierra y la identidad, por la dignidad”. ¿Qué elementos fueron propiciando la catarsis de esta unión? ¿Qué símbolos, qué hechos, qué amenazas a su forma de vida en común, y además, con una percepción e interpretación de su realidad en común?

Impacto que han tenido las políticas neoliberales para el campesinado de la región.

El gobierno de Vicente Fox aprovechó la necesidad de un nuevo aeropuerto que abasteciera a la ciudad de México (identificada desde hace décadas), para satisfacer a intereses económicos locales y transnacionales, además de consolidar alianzas políticas importantes. Por un lado, el impulso federal para la construcción del nuevo aeropuerto se debe a que formaba parte del proyecto “Plan Puebla-Panamá” (PPP), un corredor que atravesaría el territorio mexicano para ampliar el mercado libre hacia Suramérica. Particularmente, cubriría todos los estados del sureste mexicano y la región del istmo (zonas pobladas mayoritariamente por comunidades indígenas y campesinas) desde México hasta Panamá; en otras palabras, el tan anhelado complemento para el canal de Panamá. Así lo anunció Fox desde que fue electo, durante una gira por los países de Centroamérica. Para esto, era necesario fortalecer una red de comunicación y transporte, siendo el nuevo aeropuerto parte de ella. Esto también correspondía a un proyecto de “modernización del campo.” Y tal como la modernización liberal del siglo XIX, ésta implicaría expropiación de tierras, desplazamiento de comunidades, y una eventual descampesinización; o en palabras de los defensores del proyecto, “integración del campesino a la competitividad global”. Textualmente, como lo planteó Fox en una reunión del Banco Mundial en Italia el 28 de enero del 2001, su proyecto de nación estaría basado en: “la promoción de la inversión extranjera directa en México, así como la formación y desarrollo de *capital* humano que son los mecanismos más seguros y eficaces para garantizar el crecimiento económico de nuestro país.” (Presidencia de la República, en línea) Entre los objetivos básicos del PPP estarían: 1. Desarrollo humano y social; 2. Participación de la sociedad civil; 3. *Cambio estructural en la dinámica económica*; 4. Aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región; 5. Promoción de las inversiones productivas; 6. Manejo sustentable de los recursos naturales; 7. Concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica; 8. *Modernización* y fortalecimiento de las instituciones en la región. (SRE, en línea; el subrayado es mío) Aunque se enfatiza la consulta a la “sociedad civil” y poblaciones que habitan las zonas en cuestión, en la práctica la “modernización” y “cambio estructural” se ha dado de manera bastante autoritaria mediante despojos y eliminación de comunidades.

Los efectos de la “modernización del campo y del Plan Puebla-Panamá sobre comunidades campesinas e indígenas han llegado más allá de Atenco. Desde Tepoztlán, Morelos donde 4mil campesinos evitaron la construcción de un campo de golf en su pueblo, y siguen sufriendo represión por la defensa de sus experiencias de autogobierno o su oposición a la construcción de autopistas que atravesarán sus ejidos; una experiencia similar sufren comunidades indígenas que habitan la zona de Montes Azules, Chiapas, que se resisten al proyecto de reforestación también parte del Plan Puebla-Panamá; o las organizaciones campesino-ecologistas que defienden los bosques en Guerrero frente a la industria maderera transnacional; luchas en distintas ciudades contra la construcción de supermercados de cadenas transnacionales en tierras ejidales o cercanas a sitios arqueológicos; hasta la constante protesta por la reactivación del megaproyecto de construcción de la represa “La Parota” en Guerrero.

Particularmente, la región del ex lago de Texcoco, ha sufrido las consecuencias de estos proyectos de modernización en un proceso de fragilización ecológica que se expresa en la deforestación y erosión de la parte alta de la cuenca, en el abatimiento del manto

freático y en la contaminación de los ríos, así como en la pérdida de terrenos agrícolas y en la erosión eólica. La interrupción del ciclo hidrológico, que contribuye al hundimiento de la Ciudad de México, sintetiza la problemática ecológica de esta región y señala al agua como uno de los principales recursos en disputa entre la población rural y urbana local para los años venideros. La región formaba parte de una cuenca que abastecía a la Ciudad de México todavía a fines de los setenta; sin embargo, el deterioro generalizado de la rentabilidad agropecuaria en los ochenta posibilitó que los agricultores fueran cediendo terrenos ante la presión de los constructores y los especuladores inmobiliarios para cambiar el uso agrícola por el habitacional. (Ramírez, s/f)

Más relevante aún, para el campesinado, ha sido la caída paulatina de la rentabilidad de la producción agropecuaria. Por ejemplo, a pesar de la gran producción de maíz en la región, ésta ya no sirve para la comercialización interna. Como lo confirman distintos pobladores: “Desde hace años que ya no nos compran maíz, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, les sale más barato importar el maíz que lo que nos cuesta producirlo. Pero es demasiada la producción para el autoconsumo, así que lo utilizamos para alimentar al ganado”. Esto ha provocado que poco a poco, la agricultura sirva para beneficio de la ganadería más que rentable por sí misma y se transforme en una actividad secundaria para el pequeño productor que forzosamente debe buscar otra actividad productiva para complementar sus ingresos.

No menos relevante, resulta el factor político. Al optar por construir el nuevo aeropuerto en la región de Texcoco sobre otras propuestas técnicamente más viables que no traerían tantas problemáticas ambientales y sociales, se buscó favorecer al grupo político-económico del PRI en el poder por décadas en el estado de México (Atlacomulco), todavía liderado por Carlos Hank González –uno de los empresarios y políticos más poderosos de México- y representado actualmente por el gobernador del estado, Arturo Montiel. Para Fox, fue esencial hacer esta alianza política desde el principio de su mandato para establecer buenas relaciones con el PRI y así poder continuar sin reparos las “reformas estructurales” neoliberales; lo cual demostró, que las diferencias políticas se disuelven fácilmente en aras de proyectos e intereses económicos en común.

Desenvolvimiento del conflicto.

El conflicto que se desató en San Salvador Atenco en el 2001 entre campesinos y autoridades estatales tuvo distintas dimensiones y etapas que fueron acumulando el enojo de los pobladores ante la intolerancia de las autoridades hasta que se llegó a un punto de no retorno. La causa principal que desató la radicalización del movimiento sigue siendo clara: el autoritarismo, la ineficiencia y la ausencia de diálogo de los gobiernos federal y estatal para impulsar el megaproyecto de la construcción del nuevo aeropuerto en Atenco- Texcoco a través de la imposición de un decreto expropiatorio que expulsaría a los campesinos de la zona. Nunca hubo intención alguna de las autoridades por dialogar o negociar con los ejidatarios sobre el proyecto, y se impusieron medidas “compensatorias” que más que convencer, insultaron a la población. Más allá de la construcción del aeropuerto en sus tierras, o de la posibilidad de venderlas o no, la dignidad de los habitantes fue ofendida al amenazar su forma de vida, y este fue el motivo principal de su

movilización. Se trató pues, aparte de una lucha por la protección de sus tierras y forma de vida, (encarnada en la figura del ejido por su significado y legado de su lucha dentro de la Revolución Mexicana); de la defensa de una cosmovisión indígena-campesina y del patrimonio intangible cultural y natural de los recursos naturales; y de recuperar el papel e importancia política que el campesinado alguna vez tuvo dentro del Estado mexicano. Un reconocimiento que no se puede comprar. La identidad cultural que defendieron, no sólo es una identidad indígena o territorial, sino una identidad campesina forjada en la resistencia, con una memoria colectiva de las luchas que les ha costado lograr lo que tienen.

Aunque el decreto expropiatorio se publicó el 22 de octubre del 2001, los rumores y debates acerca de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la zona de Texcoco llevaban varios meses en discusión. En junio de ese año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que consideraría dos proyectos para la construcción del aeropuerto: Texcoco (San Salvador Atenco) y Tizayuca (en el estado vecino de Hidalgo). Los siguientes meses serían de arduas protestas de los opositores a los proyectos, pero también de intenso cabildeo político de los intereses económicos que estaban en juego. A pesar de que la SCT solicitó al Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizara un estudio profundo que comparara las ventajas y desventajas –sobre todo el impacto ambiental- de ambos proyectos y ubicaciones, fue evidente que este estudio sólo se pidió para cubrir las apariencias y ocultar que la decisión final sería tomada bajo criterios básicamente político-económicos. Está documentado que tanto Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes; Aarón Dychter, subsecretario de Comunicaciones y Transportes; Ernesto Velasco León, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Santiago Creel, secretario de Gobernación; y Cassio Luiselli, subsecretario de Normatividad Ambiental de la Semarnat, participaron, incluso desde la campaña de Vicente Fox a la Presidencia, directamente en el diseño, planeación y promoción del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y que recibirían beneficios políticos y económicos de aprobarse el mismo. (*Proceso*, no. 1293) Asimismo, el respaldo de grupos industriales y empresariales (como el Grupo ICA, Grupo IUSA, Daimler-Chrysler, Nestlé, Bayer de México, Dupont, la Embotelladora de Toluca de Coca-Cola, Nissan, General Motors, entre otros) al gobierno del estado de México por sus vínculos con Hank González, Montiel y el grupo Atlacomulco, también fue expreso desde un principio (*Proceso*, no. 1304)

Durante los meses anteriores a la publicación del decreto, se intensificaron los foros y mesas informativas en la zona de San Salvador Atenco y Texcoco, especialmente en la Universidad de Chapingo. Ahí, se plantearon las desventajas y agravios que representaba el proyecto para los habitantes y la ecología de la zona. Para empezar, el proyecto significaba una serie de atentados ecológicos, particularmente contra las aves que migran cada año a la zona del lago de Texcoco (de por sí en vías de extinción), y contra el lago en sí mismo como fuente hidrológica del valle de México. Eliminar del todo al lago implicaba también eliminar uno de los pocos medios de purificación atmosférica que le restan al valle de México así como propiciar mayores inundaciones al cerrar una de las principales salidas naturales de la red acuífera que tiene el valle.

(Ramírez, s/f) Así, lograron exitosamente captar la atención de diversas organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, organizaciones de defensa de derechos humanos e indigenistas.

Para la fecha en que se publicó el decreto, los habitantes de la región ya estaban bastante organizados y su red de aliados ya se hallaba consolidada. Los comunitarios fortalecieron su organización política y se movilizaron en distintos frentes, consiguiendo alianzas con sectores del movimiento indígena como el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN); estudiantiles como el Consejo General de Huelga (CGH), sector radical de la organización huelguista de la UNAM de 1999 que ha permanecido activo; sindicales como el Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); de defensa de derechos humanos y ambientalistas; y otras como el Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Libre Experimentación Teatral y Artística (CLETA). El movimiento pues, ya había iniciado antes de la expedición del decreto a través del impulso de foros de análisis y discusión, consultas ciudadanas, recolección de firmas para promover el rechazo, y mesas de participación social. (Muñoz, s/f) Es con estas alianzas que el movimiento cobra un carácter más amplio y definirá una identidad en común con ellos.

A los argumentos ambientalistas se sumaron organizaciones de derechos humanos a las protestas con argumentos técnicos y legales, lo cual les dio a los habitantes de Atenco el respaldo necesario para saber que la “razón estaba de su lado”. De hecho, el reconocido jurista Ignacio Burgoa Orihuela, toma el caso. Aparte de las marchas y bloqueos que poco a poco daban a conocer sus demandas en el ámbito nacional e internacional, enfrentaron la batalla jurídicamente, argumentando la inconstitucionalidad de las expropiaciones y presentando su caso ante la ONU, UNESCO, entre otros organismos internacionales. Ese mismo mes, 530 ejidatarios promovieron una demanda de amparo para revertir la expropiación de las tierras, y el 29 de noviembre lograron su primera victoria cuando el poder judicial suspendió la ejecución del decreto expropiatorio en el ejido de San Miguel Tocuila. Para diciembre, ya había un plantón permanente en el zócalo capitalino y los municipios de Texcoco y Acolman también interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiendo que se revocara la expropiación de las tierras.

Desde un principio, en las ponencias y estudios se adelantaba el potencial conflicto campesino que significaría expropiar de golpe las tierras ejidales que predominan en la zona. Cuando se le planteó este dilema al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, respondió:

“No estoy diciendo que no se deba tomar en cuenta la opinión de la sociedad (...) pero esa opinión tiene que ser expresada en términos *razonables y técnicos*. No es de si me late o no me late. Es una decisión de Estado, y a pesar de que debemos considerar a la sociedad, no es cuestión de votos. Le repito, es una decisión del gobierno federal.”
(*Proceso*, no. 1293, pg. 34)

Con esta línea de declaraciones, el gobierno federal dejó entrever su descalificación automática de la opinión popular, sobre todo, campesina, *antimoderna*, al no considerar

sus argumentos como igual de válidos que los “razonables y técnicos” que ellos sí evaluarían. Sus decisiones, decisiones “de Estado”, se tomarían con base en este tipo de criterios “técnicos”, excluyendo cualquier posibilidad de debate con la voluntad y necesidades populares ya que esto se considera una práctica “populista”. Esta actitud también se percibió en las reuniones que tuvieron funcionarios de la SCT y la Secretaría de Gobierno mexiquense con los ejidatarios.

“Nunca vinieron a negociar nada, sólo nos advirtieron que si seguíamos con la oposición al proyecto seríamos responsables de que los terrenos fueran invadidos irregularmente. (...) No nos han apoyado... nos dijeron que no hiciéramos asambleas ni consultáramos a los ejidatarios, que no hiciéramos pendejadas, que ya había órdenes de aprehensión y que mejor negociáramos”, dijo Antonio Altamirano, campesino de Atenco afectado por la expropiación. (*Proceso*, no. 1304, pg.35)

Aunque se esperaba que los argumentos de los ambientalistas y ejidatarios se respaldaran con los estudios realizados por el PUMA, una cláusula de confidencialidad que impuso la SCT al solicitar el estudio, impidió que los investigadores divulgaran la información. El 8 de Agosto, sólo se dio a conocer la conclusión: “ninguna de las dos opciones (Texcoco o Tizayuca) prevalece sobre la otra” (*Proceso*, no. 1293); lo cual sólo incrementó las sospechas y falta de transparencia en todo el proceso de selección. De hecho, la doctora Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, se rehusó a firmar el informe de PUMA al argumentarle al secretario de Medio Ambiente que en el equipo de flora y fauna del PUMA hubieron irregularidades y condescendencias para concluir que la conservación del hábitat era compatible con la operación del aeropuerto en Texcoco. Sobre estas irregularidades, el secretario Cerisola declaró que el gobierno de Fox estaba: “decidido a reconocer los problemas y a resolverlos, pero no a explicarlos ni a evitarlos”; mientras, el mismo presidente respaldaba la decisión invitando a los ejidatarios a aceptar ya que “se habían sacado la lotería”. Mientras el gobierno presumía que la inversión total en el proyecto sería de más de 2 billones de dólares, también anunciaba que se daría preferencia a los habitantes de la zona para ocupar puestos en el nuevo aeropuerto como personal de “limpieza y mantenimiento”. (*Proceso*, no. 1304, pg.34) Declaraciones como éstas evidenciaron aún más la ambigüedad, falta de coordinación y autoritarismo que caracterizaría las políticas del gobierno de Vicente Fox en esa ocasión y durante el resto de su sexenio.

Como los rumores y analistas preveían, el 22 de Octubre se publicó el decreto expropiatorio y la SCT anunció oficialmente que se optaría por Texcoco. “Gracias, Vicente”, decía el encabezado de la revista *Proceso*, del 28 de octubre del 2001, con la foto de Arturo Montiel y Vicente Fox dándose la mano en su portada. El decreto legalizó la expropiación de más de 4mil hectáreas de tierras de cultivo en 13 pueblos, de los cuales la mayoría se encontraban en el municipio de Atenco (70%), pero también incluía los municipios de Chimalhuacán y Texcoco (13 núcleos ejidales y 12 núcleos no campesinos). Asimismo, estableció que se pagaría entre 7 y 25 pesos (aproximadamente entre 50 centavos y 2 USD) por metro cuadrado mientras que los terrenos vecinos, mejor cotizados para poder fraccionar y venderlos para la construcción de casas, se evaluaban entre 300 y 1000 pesos por metro cuadrado (entre 30 y 100 USD). (*Proceso*, no. 1304) Debe señalarse que los municipios de Nexquipayac y Sta. Isabel Ixtapan accedieron de

inmediato a las negociaciones e indemnizaciones que les ofreció el gobierno porque sus tierras son salitrosas y poco fértiles, a diferencia de las de Atenco, que valen mucho más por contener ejidos cultivables (maíz, fríjol, cebada, hortalizas) y con un sistema de riego y drenaje construido a lo largo de los años por los ejidatarios.

La construcción del aeropuerto no sólo representó una imposición para los habitantes de Atenco, encarnó un ejemplo más de la expansión de las políticas neoliberales a todos los ámbitos sociales, incluso en este pequeño municipio; significó también la imposición de un proyecto modernizador en donde ya no cabe ni el campesinado ni las estructuras ejidales ni comunitarias. Además, la intransigencia del gobierno, la evidente preferencia hacia intereses económicos y políticos en el PRI, y su torpeza para manejar el conflicto, propició que empezara un largo desencanto con el dichoso “gobierno del cambio” al mostrar la incongruencia entre la supuesta “nueva democracia” y la forma excluyente en que se había decidido la construcción del aeropuerto. La oposición al aeropuerto en Atenco se transformó así en una crítica generalizada al gobierno foxista y a las políticas neoliberales en México. De pronto, entre las demandas y consignas de las protestas y marchas, también se escuchaban: desde el rechazo a la pretendida privatización del sector eléctrico, hasta quejas por el decrecimiento económico, o la falta de transparencia en el origen de los recursos de campaña del presidente Fox.

Durante el mes de noviembre más de 1500 ejidatarios junto con 23 organizaciones sociales y obreras, realizaron varias marchas, incluso a la residencia presidencial y el congreso, que terminaron en choques con la policía. Al iniciar el 2002, los ejidatarios habían construido trincheras con costales de arena para bloquear las entradas al municipio e instalado barricadas en los accesos de la carretera Texcoco-Lechería, ante el anuncio de que en enero comenzarían las obras y el intento de arrestar a los dirigentes del movimiento. En marzo, los ejidatarios convocaron públicamente al presidente Fox a un diálogo para plantearle su postura. Intentaron llegar a la residencia presidencial en varias ocasiones pero nunca se les recibió ni permitió el paso.

Ante el incremento de las protestas, el gobierno federal intentó comprar a los “rebeldes” aumentando el precio de indemnización por sus tierras a 64 pesos (6 USD) por metro cuadrado; pero los campesinos ya no estaban dispuestos a negociar y respondieron con “la tierra es la vida, y la vida no se vende”. Ya que esta táctica no funcionó, el gobierno del estado de México, particularmente beneficiado económica y políticamente por el proyecto, respondió con la represión y negación al diálogo. El colmo fue la intención de comenzar el desalojo de más de 4300 familias y la ocupación del ejército en comunidades que no se acataran al decreto. Comenzaron los enfrentamientos violentos, heridos, arrestos y detenidos. Ya no habría marcha atrás. Las partes se radicalizaron peligrosamente. Los atenquenses acordaron realizar guardias nocturnas para evitar el desalojo del pueblo.

El rechazo gubernamental al diálogo paulatinamente condujo a una radicalización de los enfrentamientos y desenlace violento. El 11 de julio la Procuraduría Judicial General del Estado de México (PJGEM) ejerció acción penal contra Ignacio del Valle y

Adán Espinoza Rojas, entraron al pueblo y en un operativo de búsqueda, los apresaron acusándolos de robo con violencia, privación ilegal de la libertad, y daños patrimoniales. Para exigir la libertad de sus compañeros, más de 3mil 500 ejidatarios respondieron con bloquear los accesos carreteros a la zona (Texcoco-Lechería) y se quedaron atrapados aprox. 250 camiones en el cerco. Además, esa misma noche, cientos de ejidatarios asistieron a la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco en búsqueda de sus compañeros retenidos. Al no encontrarlos ahí, detuvieron a siete funcionarios como rehenes (entre ellos el subprocurador de Justicia de Texcoco, José Andrés Mendiola), y quemaron tres patrullas. La negativa del gobierno estatal de entablar el diálogo persistió, la tensión siguió aumentando y se vislumbraba un nuevo y más brutal operativo policiaco para romper el cerco del pueblo. Los ejidatarios quemaron dos camiones e insistieron en el trueque de los detenidos. Entonces, las autoridades liberaron a 12 de los 14 ejidatarios apresados en vista de que no existían ni siquiera órdenes de aprehensión en su contra. A cambio, los ejidatarios liberaron a 5 funcionarios. Pero a la par, la policía estatal reforzó el cerco en el municipio de San Salvador Atenco, y Fox envió 90 elementos del ejército federal, 300 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 600 elementos de la policía estatal. Al verse cercados también, los atenguenses amenazaron con quemar más camiones, además de la vida de los funcionarios si no se liberaba a Ignacio del Valle y Adán Espinoza.

El 15 de julio, tras una reunión con el presidente Fox el fin de semana, el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, fue forzado a liberar a los líderes del movimiento. El gobierno federal optó por la estabilidad, especialmente cuidando la imagen internacional, antes que ceder a las presiones de los intereses económico-políticos de los grupos en el poder del estado de México. Más tarde, las últimas personas retenidas por los campesinos fueron entregadas a la policía y aseguraron que levantarían el bloqueo de las carreteras a cambio de que se retirara la presencia de la PFP, el ejército y la policía estatal de los alrededores.

A pesar de que las negociaciones siguieron en las semanas posteriores, en realidad, todos sabían que el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco estaba muerto. El 1° de agosto, la SCT declaró oficialmente la cancelación del proyecto y sin efecto los decretos expropiatorios.

De esta manera, la fuerza de un emergente movimiento social tambaleó la aparente estabilidad política del país. A pesar de que el gobierno le apostó a que la fuerza, las campañas negativas, o la ley desgastarían la movilización, esto no sucedió. La trayectoria del movimiento ya había sobrepasado el ámbito local y particular, y sus demandas se integraron a un contexto más amplio de resistencia a las políticas neoliberales. La construcción del aeropuerto no sólo significaba la expropiación de tierras, sino que los pobladores también lo interpretaron como un ataque frontal a su cultura y forma de vida. Identificaron al enemigo como las fuerzas transnacionales que se concretaban en la construcción del aeropuerto como parte del proyecto mayor Plan Puebla-Panamá; una amenaza latente para la economía campesina en todo este corredor.

Conclusiones.

Podemos concluir después de esta investigación, que las movilizaciones realizadas en San Salvador Atenco por la construcción del aeropuerto internacional entre 1999 y el 2001, fueron producto de una formación política y conciencia histórica de la misma. Es decir, que no se trató simplemente de la inercia de una movilización a partir de una problemática coyuntural. Pero ésta era una conclusión prácticamente previsible. Más interesantes resultan las interrogantes que han surgido durante la investigación y que aún quedan pendientes. Por ejemplo, si bien se trata de un movimiento social, ¿es campesino?, ¿o estamos meramente ante una manifestación política en rechazo a las políticas neoliberales encabezada por campesinos? En otras palabras, ¿qué tanto ha modificado su experiencia de lucha reciente el trasfondo del movimiento? ¿Qué tanto ha impactado su historicidad vs. su contexto actual en las razones o formas de lucha? Ante su cada vez mayor interrelación con movimientos no campesinos, ¿cuáles son los aspectos que definen su identidad realmente? ¿Se ha modificado su sentido político?

Recuperando una categoría trascendental de análisis histórico para E. P. Thompson, podemos afirmar que la clase, no como cosa sino como *proceso histórico* (Thompson, 1991), tiene tres elementos constitutivos: primero, la ubicación de un grupo social en el sistema productivo o la estructura capitalista, posición antagónica a los grupos económicos y políticos dominantes que se sustentan en relaciones sociales de explotación y exclusión; segundo, la historicidad o memoria colectiva que se construye a partir de experiencias comunes de lucha y resistencia de este grupo frente a los dominantes; tercero, una cultura y organización política, moldeada por tradiciones, creencias, necesidades y demandas que van creando una conciencia de identificación de este grupo como clase explotada. Dentro de una clase, se hallan diversas identidades políticas, es decir, subgrupos que pueden encabezar protestas según los factores de injusticia en que se sientan vulnerados. Juntos, pueden llegar a desarrollar una conciencia popular o de clase, donde se saben sujetas al mismo tipo de explotación y condiciones de vida injustas. Pero no siempre se coincide en las formas de lucha o proyecto político.

En este sentido, los pobladores de Atenco, se saben herederos de los pueblos originarios que los antecedieron, pero también se saben campesinos (no sólo como condición económica, también cultural y política) por toda la trayectoria de trabajo -y defensa del mismo- en el campo aunado a una lucha permanente por la tierra y el significado cultural, social y político que ésta tiene para su comunidad. Por lo mismo, están concientes de su ubicación dentro de las estructuras sociales, ya que comparten una identificación de explotados; saben que los frutos y ganancias del capitalismo no son para ellos, pero sí a costa de ellos. Y esta identificación es producto de su experiencia histórica. La memoria colectiva les indica que las relaciones de dominación siempre han permanecido en su contra, y que por ende, históricamente han resistido y presionado para incidir o condicionar a esta dominación, y que lo deben seguir haciendo.

Sólo así se había logrado una hegemonía estatal posrevolucionaria legitimada en pacto social (estatal) tanto por la dominación como por los dominados (Gramsci, 2000), pacto social que, sin embargo, cada vez tiene mayores problemas para renovarse y legitimarse. Ante la expansión de las políticas neoliberales en México, prevalece entre las

clases populares un sentimiento de ofensa a la dignidad y quebrantamiento del pacto social que había prevalecido por décadas después de la Revolución. Por un lado, estos sectores sociales ya no son considerados con la misma importancia que antes; transitaron de ser prácticamente los pilares de la política de masas posrevolucionaria, a meros receptores de concesiones mediocres. Por el otro, el Estado ha dejado de ser el garante de las políticas sociales que se habían ganado a pulso después de la Revolución. Se ha roto el pacto social y estatal. Por eso ahora, las distintas manifestaciones sociales en contra de las políticas neoliberales nos reflejan que, nuevamente, está en disputa quién y cómo se hace la política en México.

Los atenguenses saben que queda una agenda pendiente. Pero en qué consiste exactamente y cómo lograrla se encuentra todavía en proceso de definición. “Estamos en guardia permanente... cuando quieran volver a quitarnos nuestras tierras, estaremos esperándolos con la misma fuerza”. Más allá de una posición defensiva, proponen recuperar formas de gobierno comunitarias y autónomas. Para este objetivo, pretendieron bloquear y desconocer elecciones locales en julio del 2003, quemando urnas e intentando establecer un municipio autónomo en espíritu de otros ejemplos en Morelos y Chiapas. Sin embargo esta táctica ha marginado cada vez más al movimiento de otros sectores de la izquierda y de su misma comunidad. Ante la cercanía de las elecciones presidenciales, los atenguenses no veían a los partidos políticos como una opción confiable, como me dijo Jorge Flores Ibarra: “Nosotros no queremos nada que ver con los partidos políticos, pero nos sometemos a la voluntad popular... si quieren que participemos en las siguientes elecciones, lo haremos”. Esta ambigüedad tal vez esté relacionada con la formación misma de las distintas organizaciones sociales “gestoras” en Atenco, que surgen históricamente como estructuras paralelas y en protesta a la falta de respuesta de las instituciones políticas tradicionales.

Aún así, es innegable que, por lo menos en su comunidad, lograron reestructurar en cierta medida las relaciones de dominación. La municipalidad sigue gobernada por el PRI, pero las cosas ya no son iguales. En la práctica, la municipalidad no toma decisiones trascendentales sin consultar al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Un mural de Zapata y escenas de otras luchas campesinas, incluyendo la de Atenco, domina la plaza central. El auditorio del palacio municipal ha sido rebautizado “Emiliano Zapata”, y el centro comunitario cultural, controlado por el Frente, fue renombrado “José Enrique Espinoza Juárez” en honor al compañero muerto durante los enfrentamientos del 2002 por la golpiza que recibió de la policía.

Hoy en día, el Frente concentra sus actividades políticas en proporcionar talleres educativos, políticos y culturales en el centro comunitario. Pero más interesante aún, ha fortalecido su liderazgo político local y de algún modo, sirven como gestores sociales, o mediadores que apoyan a otros movimientos en la petición y presión de sus demandas ante el gobierno. “Sabemos que ellos no nos pueden solucionar nuestros problemas, pero es bueno saber que contamos con alguien de nuestro lado que nos apoye frente a las autoridades”, comenta un habitante del municipio vecino que fue a platicarles el conflicto de linderos y propiedad de terrenos que viven con caciques locales. Esto lo confirma Jorge Flores: “Cada semana vienen compañeros de otros poblados para conversar con

nosotros, nos piden apoyo en sus demandas, nosotros les abrimos el espacio permanente que logramos dentro de la Secretaría de Gobernación”.

Además de la solidaridad con otras comunidades campesinas que han sido impactadas por proyectos del Plan Puebla-Panamá mencionados arriba, la lucha frente a las políticas neoliberales atraviesa otros sectores populares que a su vez se han solidarizado con la causa atenuense: electricistas en contra de la privatización del sector, mineros en Michoacán, maestros de escuelas normales rurales, secciones del CNTE, hasta el CGH que revive su protesta contra el neoliberalismo cada oportunidad que encuentra. Como reitera América del Valle: “aprendimos que la lucha no es sólo campesina sino que abarca los tres vectores de la organización popular: campesinos, obreros y magisterio.”

Ninguno de estos movimientos es nuevo y sus luchas tienen las motivaciones históricas y no resueltas de siempre; pero ahora además se entremezclan con las que la ofensiva neoliberal les impone. Lo que también se entremezcla actualmente de manera distinta, es la protesta social fuera de la institucionalidad sindical o partidista; esas pequeñas luchas que se identifican entre sí por la similitud de sus demandas y formas de protesta, en una configuración peculiar y más amplia que la campesina u obrera tradicional. La experiencia y aprendizajes están en lo “dándose” (Zemelman, 1987). En una ocasión le pregunté a Don Flores si existe algún condicionamiento a su apoyo: “Sólo que nos hablen con la verdad”.

En el Estado neoliberal se disputa el derecho de hacer política. En México, los acontecimientos ocurridos durante el contexto de las elecciones presidenciales del 2006 lo demostraron así. Mineros, maestros, campesinos, se enfrentaron violentamente a las instituciones estatales que los marginaron cada vez más de la mesa de negociaciones. Y se les castigó por ello. La represión a los movimientos sociales durante este periodo no se ocultó y se realizó de manera burda, torpe y todavía impune.

El 5 de mayo del 2006 un intento por desalojar a comerciantes floristas del centro de Texcoco desembocó en un episodio preocupante. Entre los floristas, se encontraban comerciantes de San Salvador Atenco, que además tenían el apoyo del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. La resistencia a ser desalojados atrajo un gran operativo policiaco brutal que apresó a Ignacio del Valle entre otros dirigentes. Esto provocó horas más tarde un enfrentamiento mayor entre más de mil atenuenses y la policía estatal. Un joven muerto y decenas de heridos, incluyendo policías, además de un nuevo atrincheramiento de San Salvador Atenco y funcionarios secuestrados, fue el saldo. Al día siguiente, un operativo policiaco de más de 300 policías tomó el pueblo. Entraron casa por casa en busca de los dirigentes, apresaron a más de 100 personas, y lo impensable, violaron y hostigaron sexualmente a las mujeres arrestadas en el trayecto del pueblo a la cárcel. El gobierno estatal se rehusó a reconocer su responsabilidad en los hechos y descalificó las denuncias de violación de derechos humanos. Todo esto, en el marco de la visita del EZLN y La Otra Campaña a la ciudad de México.

Aún antes de estos acontecimientos la cercanía entre el EZLN y el FPDT era notable. Los atenguenses acompañaban a la Campaña en distintas ciudades, e incluso San Salvador Atenco recibió a la delegación zapatista el 26 de abril del 2006. Con mayor razón, frente a los sucesos del 5 de mayo, el EZLN declaró su permanencia en la ciudad de México hasta que se castigaran a los policías responsables de los abusos y liberaran a los atenguenses apresados. Desde esas fechas, liderean mítines y convocan a marchas multitudinarias a las cuales asisten organizaciones sociales campesinas, secciones del CNTE, y el CGH, entre otras.

La presencia de los atenguenses en el conflicto magisterial de Oaxaca y formación de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) representa la solidaridad mutua entre ambas organizaciones y una alianza casi natural. Y que juntos el CGH, el EZLN, CNTE y los atenguenses, entre otras organizaciones sociales simpatizantes de la Otra Campaña, estén realizando reuniones, marchas y plantones, uniendo sus demandas, siguiendo los mismos mecanismos de protesta y mostrando la misma displicencia por las instituciones políticas tradicionales no es fortuito. Comparten la misma experiencia reciente de represión y exclusión que los ha llevado a radicalizar su postura. Las consecuencias políticas de esta postura son evidentes: por un lado los ha marginado de sectores civiles y políticos importantes de la izquierda; por el otro, son el blanco perfecto para ser utilizados con fines políticos por ambos lados del espectro ideológico, y lo saben. Se trata de sectores de la protesta social que han confluído en una identidad en común: el rechazo a las políticas neoliberales y el capitalismo en su conjunto, pero sobre todo, la radicalización plasmada en sus métodos de lucha y en el descrédito de la “política” en general.

El Estado neoliberal ha contribuido directamente a la marginalización económica y política de los sectores populares. Esto ha radicalizado a ciertos movimientos sociales y coartado la participación política en las instituciones políticas tradicionales como los sindicatos y partidos políticos, porque su poder y legitimidad se han reducido. Aunque por el momento sus protestas queden en la marginalidad, no han dejado de ser un factor que también juega un papel importante en la política nacional, o las dinámicas de las relaciones de dominación y resistencia ante la crisis de la legitimidad estatal como pacto social.

Dentro y fuera de los mecanismos de organización política tradicionales como los partidos políticos y los sindicatos, emergen alianzas y frentes sociales, con demandas locales, pero que fácilmente se asocian e integran en un marco general de resistencia a la eliminación de todos los beneficios y garantías sociales que se habían logrado (también como resultado de luchas) como: la educación gratuita; la seguridad social, sistema de pensiones y de salud pública; empresas estatales que administran los servicios públicos como la telefonía, la distribución de agua y luz; así como los recursos naturales, minerales y los hidrocarburos. Todas tienen en común la lucha por proteger su territorio, medio ambiente, cultura, forma de vida, medio de trabajo, derechos laborales, sexuales, políticos, etc. de la violencia con que los desmantela el capital transnacional y la intolerancia de un cada vez más presente retorno al conservadurismo político y moral.

Por tanto, el análisis de estos movimientos, su formación política, trayectoria de lucha, y formulación de objetivos y demandas; es esencial para ubicar los terrenos de identificación entre unos y otros. Y podemos hacerlo estudiando casos específicos, pero no aislados, de la regeneración de sectores históricos combativos que han logrado enmarcarse en la protesta social actual. Atenco es ejemplo de ello. Más allá de un contexto de resistencias sociales frente a las políticas neoliberales, estamos ante la continuación de luchas contra el capitalismo. A pesar del derrumbe del socialismo soviético, no han cesado de forjarse, especialmente en Latinoamérica, ideales populares de liberación nacional y de justicia social; que aunados a procesos de identidades y espacios políticos nuevos, siguen formando parte de una estructura social capitalista que se reproduce en las clases sociales y sus mecanismos de lucha. Por eso, sostengo que la inercia de movilización de los habitantes de Atenco, no sólo correspondió a su territorialidad, etnicidad o clase social, sino a la articulación de todos estos elementos; que no se han conjugado al azar, sino que se han construido en un proceso histórico de resistencia. Se saben entonces, sujetos que ocupan un lugar en esta estructura (económica, política, social y cultural), pero también capaces de transformar las formas y dinámicas del sistema hegemónico.

NOTAS

* Este texto forma parte de una investigación más amplia realizada de Enero a Diciembre del 2005 gracias a una beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

** Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, México. Estudiante del doctorado en Sociología en la Universidad de Essex, Reino Unido.

¹ Es interesante remarcar la asociación que hace David Pájaro de Velásquez como “un español”; esto nos muestra una continuidad en la memoria colectiva; es decir, de la noción que tienen sobre las formas de dominación que se han ejercido sobre ellos, primero como indígenas, luego como campesinos y a su vez como obreros.

² Así lo documentó el Prof. Arturo Perales Salvador de la Universidad de Chapingo, en una entrevista el 15 de abril del 2005. Notas periodísticas y declaraciones de los pobladores confirman este suceso ampliamente. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia ya que el dueño (yerno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz) apeló por años la decisión inicial de las autoridades laborales de pagar salarios que les debía a los trabajadores argumentando la quiebra e incapacidad de pago.

³ Arturo Montiel, fue por varios meses, el principal adversario dentro del PRI de Roberto Madrazo (ex gobernador de Tabasco y actual presidente del PRI) para la candidatura del PRI por la Presidencia de México. Tanto Montiel como Madrazo, tienen una fama no gratuita de representar la mano dura del PRI, ambos involucrados en escándalos de corrupción y represión en sus respectivos estados, pero sobre todo, ambos con mucho dinero para apoyar sus candidaturas.

⁴ Desde estos momentos se comienza a evidenciar la relación entre el EZLN y el FPDT. El EZLN hará frecuentes pronunciamientos a favor de la protesta contra la construcción del aeropuerto.

⁵ Organización producto de la huelga general que se dio en la UNAM entre Mayo de 1999 y Febrero del 2000, por la protesta al alza de cuotas y el proyecto de “modernización” y eventual privatización de la educación superior.

⁶ Organización sindical de maestros que surgió en los '90 en oposición al corporativista, autoritario y abiertamente ligado al PRI, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo.

⁷ Los mismos pobladores de San Salvador Atenco se declararon como “municipio en rebeldía” desde Diciembre del 2001, expulsando y desconociendo a las autoridades municipales. A la par, se dieron numerosas declaraciones infundamentadas de funcionarios gubernamentales que los acusaron de tener infiltraciones de grupos “guerrilleros”.

Bibliografía

Anderson, Perry. 2000 “Historia y lecciones del neoliberalismo” en Houtart, Francois y Francois Polet (coords), *El otro Davos. Globalización de resistencias y de luchas*. (México: Plaza y Valdés) pp. 16-31.

Aragón, Ana María. 2004 “Migración y explotación de la fuerza de trabajo en los años noventa: saldos del neoliberalismo” en Rubio, Blanca (coord.), 2004 *El Sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio*. (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales/Plaza y Valdés) pp. 239-268

Bonfil Batalla, Guillermo. 1987 *México Profundo: una civilización negada*. (México: Grijalbo)

Calva, José Luis (coord.) 1997 *El Campo mexicano: ajuste neoliberal y alternativas*. (México: Juan Pablos)

Córdova, Arnaldo. 1980 (1974) *La política de masas del cardenismo*, (México: Era)

de Grammont, Hubert. 1996 “La organización gremial de los agricultores frente a los procesos de globalización en la agricultura”, en de Grammont, Hubert (coord.), *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*. (México: UNAM/Plaza y Valdés) pp. 21-67.

Florescano, Enrique. 1994 *Memoria Mexicana*, Capítulo V. “La conquista y la elaboración de un nuevo discurso histórico” y Capítulo VI. “Transformación de la memoria indígena”, (México: Fondo de Cultura Económica)

García de León, Antonio. 1994 *Resistencia y Utopía. 500 años de historia de la provincia de Chiapas*. (México: Era)

Gilly, Adolfo. 2001(1994) *El cardenismo: una utopía mexicana*. (México: Era)

González Pacheco, Cuauhtémoc [et al.] 1992 *El sector agropecuario mexicano frente al tratado de libre comercio*. (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas/Universidad Autónoma de Chapingo)

Gramsci, Antonio. 2000 (1976) “Cuaderno 25 (XXIII), 1934: Al margen de la historia. (Historia de los grupos sociales subalternos)”, *Cuadernos de la cárcel*. vol. 6 (México: Ediciones Era/BUAP) pp. 173-187.

Guha, Ranahit. 2002 *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*. (Barcelona: Crítica)

Katz, Friedrich (comp.), 1990 *Revuelta, rebelión y revolución: La lucha rural en México del siglo xvi al siglo xx*. (México: Era)

Muñoz Sánchez, Patricia. “La rebelión de Atenco y la defensa del patrimonio cultural de la región”, s/f

Presidencia de la República. *Portal. Actividades y Comunicados*. En línea: http://presidencia.gob.mx/actividades/comunicados/?contenido=410&pagina=1&fecha_desde_year=2001&fecha_hasta_year=2001&palabras=aeropuerto+texcoco

Prud'homme, Jean-Francois, (coord.) 1995 *El Impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*. (México: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales/Plaza y Valdés)

Ramírez Miranda, César Adrián y Patricia Muñoz Sánchez. “Nuevos retos para el desarrollo de la región Atenco-Texcoco: Una propuesta desde la UACH” s/f

- Rodríguez, Sandra y Silvia Ortiz. 2001 "Vínculos del foxismo con el proyecto promovido por Hank", en *Proceso*, (México) no. 1293, 12 de agosto del 2001, pp. 32-34
- Rodríguez, Sandra. 2001 "Turbias maniobras en la operación Texcoco", en *Proceso*, (México) no. 1304, 28 de octubre del 2001, pp. 32-39.
- Roux, Rhina. 2005 *El Príncipe Mexicano. Subalternidad, historia y Estado*. (México: Era)
- Rubio, Blanca (coord.), 2004 *El Sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio*. (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales/Plaza y Valdés)
- Salinas de Gortari, Carlos. 1990 "Reformando al Estado" en *Nexos* (México) no. 148, abril 1990, pp. 27-32
- Saxe-Fernández, John (et. al), 1999 *Globalización, crítica a un paradigma*. (México: UNAM/Plaza y Janés)
- Scott, James C. 2000 *Los dominados y el arte de la resistencia*. (México: Era)
- Secretaría de Relaciones Exteriores. *Portal Plan Puebla-Panamá*. En línea: <http://portal.sre.gob.mx/ppp/index.php?option=displaypage&Itemid=146&op=page&SubMenu=>
- Thompson, E.P. 1991 *The Making of the English Working Class*, (London: Penguin Books, London)
- Tutino, John. 1990 *De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia agraria 1750/1940*. (México: Era)
- Villarreal, René. 1993 *Liberalismo Social y Reforma del Estado. México en la era del capitalismo posmoderno* (México, Fondo de Cultura Económica)
- Warman, Arturo. 1998 (1984) "La lucha social en el campo de México. Un esfuerzo de periodización", en González Casanova, Pablo (coord.), *Historia Política de los campesinos latinoamericanos. Vol. 1*. (México: UNAM/Siglo XXI) pp. 14-39
- Womack, John. 1982 *Zapata y la Revolución mexicana* (México: Siglo XXI)
- Zavaleta Mercado, René. 1983 "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia", en Zavaleta Mercado, René (comp.). *Bolivia Hoy*. (México: Siglo XXI) pp. 219-239
- Zemelman, Hugo. 1987 *Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente*. Serie Jornadas, núm.111, (México: El Colegio de México) pp.15-31.